

Corrupción en Latinoamérica: Un freno para el desarrollo económico

Mario V. González Fuentes

A la luz de los resultados electorales en Bolivia y los movimientos políticos que se están gestando en la región, se abre el debate sobre la situación económica y social de una sociedad que parece estar repitiendo su historia una y otra vez. ¿Cuánta desigualdad y pobreza puede soportar la democracia en Latinoamérica? Esa democracia que durante décadas ha estado representada por fraudes, escándalos de corrupción, clientelismo y tráfico de influencias es la misma que hoy crea sentimientos de preocupación en la comunidad inversionista internacional.

Recientemente, uno de los desafíos que se han impuesto la mayoría de las organizaciones internacionales es el combate a la corrupción y la lucha por la transparencia. Este tema se ha vuelto crítico, ya que la evidencia empírica sugiere que

La evidencia empírica sugiere que los gobiernos en los países más pobres son también los más corruptos

los gobiernos en los países más pobres son también los más corruptos. Resulta fácil comprender

el círculo vicioso al que una economía con estos problemas se enfrenta, principalmente a través de la pérdida de inversión extranjera y el detrimento de la ayuda internacional. Con unas condiciones precarias en términos de desarrollo humano, desigualdad y pobreza, Latinoamérica parece necesitar más que nunca resolver sus problemas de institucionalidad y gobernabilidad. De lo contrario, la comunidad internacional seguirá percibiendo a la región como un foco de inestabilidad y corrupción, retrasando el flujo de recursos económicos que tanto necesitan los nuevos líderes de corte populista para

llevar a cabo sus –de momento- ambiciosas agendas sociales que establecen como una de sus prioridades la lucha contra la pobreza.

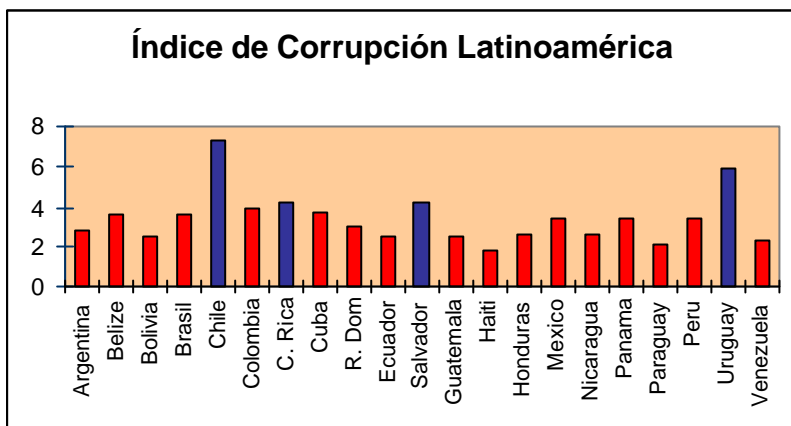
Desde 1995, la organización Transparencia Internacional calcula y publica su Índice Global de Percepción de la Corrupción, cuya finalidad es la de presentar anualmente un ranking de países y evaluar las políticas que cada uno de ellos lleva a cabo en términos de su evolución en dicho ranking. Aunque su metodología de medición es ampliamente criticada, parece reabrir el debate sobre estos temas cada vez que la organización publica su diagnóstico. Ha levantado ampollas, por ejemplo, el que la organización haya estimado en su último informe que, en México, los actos corruptos le cuestan a la sociedad el equivalente a 28% del presupuesto del gobierno federal, es decir, equivalente al presupuesto destinado a los temas de educación y capacitación.

Recientemente, con la presentación de los resultados para 2005, algunas figuras públicas latinoamericanas han puesto de manifiesto la incomodidad que les causa las posiciones que sus correspondientes países ocupan en el índice global. De los 21 países latinoamericanos incluidos en el análisis, 17 se encuentran por debajo del nivel medio mundial.

El bajo ahorro nacional que mantiene actualmente la economía boliviana no deja mucho margen de maniobra.

Esto representa poco más del 80% de la muestra, es decir, cuatro de cada cinco países latinoamericanos son más corruptos que el promedio en el mundo. Entre este porcentaje se encuentra Bolivia cuya posición número 117 en el ranking la comparte con países como Afganistán, Uganda y Guatemala, entre otros. Por encima de Bolivia, se encuentran países como Zimbabwe, Zambia, Vietnam y la India.

¿Será capaz Evo Morales de llevar a cabo las políticas necesarias para poder sacar a Bolivia de su atraso económico y social? ¿Ayudarán las medidas planteadas por su programa de gobierno -como la nacionalización de los hidrocarburos- al desarrollo a



largo plazo para Bolivia? Las empresas internacionales en el sector, tales como Repsol YPF, British Petroleum y la francesa

Total, ya han comenzado a mostrar su preocupación por la inestabilidad de su situación en el país. Esta preocupación ya se ha manifestado en demoras de cuantiosas inversiones planeadas para 2006 por alguna de estas empresas, como lo analizaba el diario Le Monde hace un par de semanas.

Desgraciadamente, el bajo ahorro nacional que mantiene actualmente la economía boliviana no deja mucho margen de maniobra como para permitirse prescindir de la llegada de mayor inversión extranjera. Por ello, se hace cada vez más urgente el desarrollo de un marco institucional que cree las condiciones apropiadas para el respeto a la propiedad privada y el fomento de las inversiones extranjeras.

Estas condiciones hacen referencia a muy diversas y numerosas características básicas del marco regulatorio en un país. Al respecto, un proyecto de investigación llevado a cabo por economistas del Banco Mundial¹ calcula, desde 1996 y para un total de 209 países, seis índices que miden diferentes aspectos de la gobernabilidad y la

¹ D. Kaufmann A. Kraay, and M. Mastruzzi. "Governance Matters IV: Governance Indicators for 1996-2004" (May 2005). World Bank Policy Research Working Paper Series No. 3630. http://www.worldbank.org/wbi/governance/pdf/GovMatters_IV_main.pdf

calidad de las instituciones. Estos indicadores son calculados incorporando tanto aspectos subjetivos como objetivos de cada una de estas 6 características. Dos de estos índices -a los cuales los autores llaman Calidad Regulatoria y Estado de Derecho- miden la incidencia de políticas “no amigables” con el sistema de mercado y la calidad de los sistemas judiciales en el cumplimiento de leyes y contratos, respectivamente.

Los últimos resultados publicados son desalentadores para los 22 países latinoamericanos incluidos en el análisis. La mitad de ellos muestran puntuaciones de estos dos índices por debajo del promedio global. Casos como Bolivia, Colombia, Ecuador, Honduras, Paraguay y Venezuela presentan históricamente para el índice de Estado de Derecho la tendencia a encontrarse por debajo de niveles medianamente aceptables. Algunos de ellos se distinguen del resto por su incapacidad en mejorar sus niveles, incluso empeorándolos. Esto refleja un deficiente cumplimiento de las leyes y contratos en estas seis economías, lo que podría representar una barrera a la entrada de capital extranjero que países como Bolivia necesitan con urgencia para mejorar, por ejemplo, la situación de persistente desempleo que afecta al mercado laboral boliviano.

Cabe esperar que las señales tranquilizadoras que Evo Morales ha estado enviando a los inversionistas internacionales a lo largo de su viaje por Europa sirvan para calmar las turbulentas aguas en las que se menean las expectativas sobre el panorama que vislumbran las empresas internacionales con presencia en Bolivia. Sólo queda que estas señales sean congruentes con un discurso político más moderado y un pragmatismo económico que, por un lado, permita materializar las reformas estructurales que necesita su sistema económico y, además, facilite la inserción de Bolivia en la escena económica global.